

Santiago, tres de febrero de dos mil veinticinco.

Vistos:

El Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en la causa RIT 341-2023, RUC 2.200.652.774-8, condenó a Rodrigo Antonio Morales Fuentes a la pena cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias legales, y al pago de una multa de cuarenta unidades tributarias mensuales, como autor del delito de tráfico de drogas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas, sorprendido el 5 de julio de 2022, en la comuna de Conchalí.

Asimismo, se le condenó a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo y a las accesorias legales, en calidad de autor del delito consumado de porte de arma de fuego prohibida, perpetrado en la misma fecha y lugar; y a la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio y a las accesorias legales, en calidad de autor del delito consumado de porte ilegal de municiones, cometido en la misma fecha y lugar.

En contra de dicho fallo, la defensa del sentenciado recurrió de nulidad, arbitrio que se conoció en la audiencia pública de catorce de enero pasado, oportunidad en la cual la defensa incorporó la prueba ofrecida en su arbitrio, convocándose a los intervinientes a la comunicación de la sentencia para el día de hoy, como consta del acta respectiva.

Considerando:

Primero: Que, el recurso se sustenta de manera primordial en la causal de nulidad prevista en el artículo 373, letra a) del Código Procesal Penal. Explica que las circunstancias de la detención contempladas en el parte policial de detención fueron las que dieron pie a la solicitud de declaración de ilegalidad de la detención en la audiencia de control de la detención y en la audiencia de preparación de juicio oral, derivado de la existencia de una denuncia anónima.

Estima que, de acuerdo con el mérito del parte policial que transcribe, la revisión de las vestimentas del acusado se llevó a cabo por los funcionarios



policiales, amparándose en lo dispuesto en el artículo 85 del Código Procesal Penal y, valiéndose del único indicio consistente en una denuncia anónima, realizada de manera telefónica, a través de la cual se daban características y vestimentas de dos sujetos que se encontraban manipulando, aparentemente, armas de fuego. Refiere que no hubo acreditación de la existencia de la denuncia anónima, sino únicamente los dichos de los funcionarios policiales.

Agrega que la forma en cómo se vieron afectadas estas garantías en la causa que se recurre, emanan del hecho de haberse realizado un control de identidad no ajustado a las disposiciones del Código Procesal Penal y de la Carta Fundamental que indica y los artículos 85 y 228 del Código Procesal Penal las que vician de nulidad la sentencia recurrida, por infracción a los derechos garantizados por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, por lo que solicita se anule la sentencia y el juicio oral que la precede, solicitando se retrotraigan los autos al estado de realización de un nuevo juicio oral excluyéndose del auto de apertura la evidencia que precisa.

Como primera causal subsidiaria de invalidación, invoca el motivo absoluto de nulidad contenido en la letra e), del artículo 374 del Código Procesal Penal, afirmando que, además de la vulneración de garantías desarrollada en el acápite anterior, la defensa cuestionó, de manera subsidiaria, la existencia del delito de porte de arma de fuego prohibida.

Explica que, como primer elemento, se señaló que no se trató de un arma prohibida, y el hecho es atípico, toda vez que se trató de un arma a fogueo que venía desobturada de fábrica o, dicho de otro modo, que la misma no había sido modificada. A pesar de lo alegado por la defensa el tribunal llegó a la conclusión de que la pistola a fogueo estaba desobturada manualmente, conclusión a la cual se arribó, en su concepto, sin atender al principio lógico de la razón suficiente, dado que el perito de la defensa y un funcionario de la SIP dieron cuenta de mantenerse la misma desobturada de fábrica, lo cual se contrapuso a lo informado por el perito armero de cargo, que concluyó que el arma periciada había sido



desobturada manualmente, por lo que pide invalidar la sentencia y el juicio oral, ordenando realizar un nuevo juicio oral.

En subsidio de lo anterior, funda el recurso en la causal de nulidad prevista en el artículo 373, letra b) del compendio adjetivo, toda vez que la defensa considera que existió una errónea aplicación del Derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo al condenar al acusado por el delito de porte de arma de fuego prohibida, previsto y sancionado en el artículo 14 de la ley N° 17.798, en relación con el artículo 3° del mismo cuerpo legal, respecto a la aptitud de disparo del arma.

Estima que si el arma en cuestión pudo expulsar un proyectil y que si esa capacidad constituya un peligro potencial en su uso, es una conclusión del tribunal que no se basa en ninguna de las exposiciones de ambos peritos, toda vez que el perito del Ministerio Público explicó que no se podía determinar con esa prueba la capacidad de generar un daño, menos aun con armas a fogeo, y que el perito de la defensa, aseguró que esta pistola a fogeo no era capaz de generar daño. Esto, además, parece ser coincidente con la Resolución Exenta N°433, que no incluye en su listado de armas de fogeo cuya comercialización es prohibida, la pistola a fogeo marca Umarex, modelo Derringer.

Sostiene que, el delito de porte de arma de fuego prohibida es un delito de peligro y, más allá de la discusión de si es un delito de peligro abstracto o concreto, lo central es que, para que el delito de configure, se debe afectar el bien jurídico protegido, cual es la seguridad de los ciudadanos, poniéndola en peligro, al menos potencialmente, pero de manera real y acreditada. Con que exista un peligro real, y debidamente acreditado, quiere decir que el arma debe tener la facultad, real y acreditada, de generarle un daño a una persona, razón por la cual solicita invalidar parcialmente la sentencia y, en el acápite de la condena como autor del delito de porte de arma de fuego prohibida, se dicte sentencia de reemplazo absolutoria.



Segundo: Que, en lo concerniente a los hechos que fundaron la acusación del Ministerio Público, la sentencia impugnada, en su motivo duodécimo, tuvo por acreditado que, *“...el día 5 de julio de 2022, aproximadamente a las 19:30 horas, Rodrigo Antonio Morales Fuentes, junto a otro sujeto, fueron sorprendidos por personal policial frente al número 4190 de calle Cancha Rayada, en la comuna de Conchalí, en circunstancias que poseían y portaba consigo, en el caso de Morales Fuentes, al interior de una mochila: una bolsa plástica contenedora de cannabis sativa a granel, con un peso bruto de 266 gramos; un arma de fuego tipo pistola de dos cañones, color gris, sin marca ni número de serie, de calibre desconocido, en buenas condiciones mecánicas y apta para su uso; 82 cartuchos o municiones, de marca y calibre desconocido, con una R grabada en su culote, aptos para ser percutados; dos municiones sin percutar marca S&B, calibre 9 mm, aptas para su uso; y la suma de \$30.000. En tanto que el sujeto que lo acompañaba, al interior de la mochila que portaba, mantenía 98 envoltorios de papel contenedores de pasta base de cocaína, con un peso bruto de 15,6 gramos; un arma de fuego tipo revólver marca Italo Gra, sin modelo ni número de serie, calibre no determinado, en buenas condiciones mecánicas y apto para su uso; 43 municiones sin percutar marca R, de calibre desconocido, aptas para su uso. Ninguno de ellos mantenía permiso para el porte o tenencia de las armas y municiones antes mencionadas”*.

Estos hechos fueron calificados por el tribunal como constitutivos —en relación con el acusado Morales Fuentes— de un delito consumado de tráfico ilícito de drogas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas, en grado consumado, previsto y sancionado en el artículo 3° de la ley N° 20.000, en relación con el artículo 1° de la misma ley.

Del mismo modo, se tipificó el delito de porte de arma de fuego prohibida del artículo 14° de la Ley sobre Control de Armas y el delito de porte o tenencia ilegal de municiones, ambos en grado de consumado, previsto y sancionado en los artículos 2° letra c) y 9° de la ley N° 17.798.



En torno a lo afirmado en el recurso de nulidad, el fundamento decimoquinto del fallo impugnado estableció que, “...en cuanto al análisis de las argumentaciones de la Defensa y la solicitud de absolución cabe hacer presente que:

I.- De la infracción de garantías al no haber indicio para proceder a la fiscalización del acusado:

Esta alegación fue rechazada porque de la información aportada por los funcionarios policiales daba cuenta que el procedimiento se inicia por una llamada anónima, pero no se trataba de cualquier denuncia, sino que una aportada al teléfono del cuadrante y que daba información precisa de que se estaba cometiendo un delito, a saber, se indicaba que estaban en calle Cancha Rayada, a la altura de número 4190 en Conchalí, dos personas de sexo masculino, uno que vestía un buzo gris con rayas rojas y portaba una mochila verde y otro sujeto con casaca negra, sin mangas y mochila negra, manipulaban armas en la vía pública.

De la declaración de los funcionarios de Carabineros, se desprende que no se trató de una simple denuncia y sin más concurrieron al lugar, sino que evaluaron el riesgo alertado de que personas estuviesen manipulando armamento y pidieron cooperación o refuerzo a otro funcionario que se encontraba a la patrulla municipal que estaba en un cuadrante distinto, para así poder concurrir dos dispositivos policiales al lugar dado que era un comunicado con un factor de riesgo alto, tal como indicó Alejandro Monsalve Ceballos, por ello, se aprecia que luego de recibir la denuncia los funcionarios policiales sopesaron la información entregada antes de concurrir al lugar indicado, realizando una acción que se condice con la importancia y eventual nivel de riesgo que revestía el procedimiento. La circunstancia de que carabineros no los haya observado directamente manipulado las armas o cometiendo algún otro delito en la vía pública no es obstáculo para efectuar un control de identidad del artículo 85 del Código Procesal Penal, porque de ser así, los sujetos habrían sido detenidos de



inmediato por una situación de flagrancia del artículo 130 del Código Procesal Penal y menos aún invalida la información proporcionada en la denuncia que fue otorgada con una serie de detalles, descartando el sesgo policial.

El hecho de que no hayan registrado el número telefónico desde el cual emanaba el denuncia o que no existan grabaciones del mismo, fue explicado en audiencia, dada la cantidad de llamados que reciben y que se trata de un aparato que no reúne la tecnología suficiente para poder realizar grabaciones, pero eso no desvirtúa el hecho de que los funcionarios registraron en el parte policial que la información obtenida emanaba de una denuncia anónima y tampoco invalida la información proporcionada a través de esa llamada que permitió la fiscalización del acusado y su acompañante, constituyendo el control de identidad una herramienta práctica de naturaleza autónoma para las policías que, dentro de las hipótesis descritas en el mentado artículo 85 del Código Procesal Penal, ejercen labores preventivas de delitos o bien de constatación de situaciones que podrían revestir tales caracteres. No puede concebirse o ser interpretada la referida norma de forma diversa, puesto que su tenor literal resulta claro y categórico en lo pertinente al origen, naturaleza y finalidades esenciales de la diligencia...

...III.- En cuanto a la naturaleza del arma de fuego incautada al acusado, que el persecutor sostiene que es un arma de fogeo adaptada para disparar municiones convencionales.

La Defensa basó su solicitud en lo planteado por el perito armero y balístico Daniel Santander Ortega, de vasta experiencia, quien luego de analizar la evidencia incriminada directamente en dependencias del Labocar, concluyó que la pistola a fogeo de dos cañones era de marca Umarex, modelo Derringer que no había sido modificada y que este modelo venía desobturado de fábrica y si se disparaba algún proyectil, saldría sin dirección, perdiendo energía y por ende eficacia y no sería capaz de provocar daño.

Por otro lado se contó con el dictamen experto del perito armero el Labocar, Juan Bustos Alarcón quien luego de analizar las evidencias contendidas en la



cadena de custodia N°5659792, que correspondían a los elementos hallados en poder del acusado, determinó que el arma se trataba de una pistola a fogueo o detonadora, de calibre 6 milímetros y que por diseño se trataba de un utensilio que debiese mantener sus cañones obturados, sin embargo, había sido modificada, desobturando los cañones los cuales permitían ser utilizados como arma de fuego.

Efectuó la prueba de disparo, para lo cual utilizó las municiones incriminadas encontradas con el arma, activando la cápsula iniciadora y expulsando el proyectil balístico, con lo cual concluyó que podría ser utilizada como arma de fuego.

Enfrentados estos sentenciadores a dos posiciones tan divergentes, el Tribunal estimó que la pericia emanada de Labocar era la que metodológicamente se ajustaba a las conclusiones que emite.

Lo anterior, porque el perito de la Defensa no explica cómo un arma cuya naturaleza era apta sólo para disparar municiones de fogueo, es capaz de disparar proyectiles balísticos convencionales, no una vez, sino que en dos por el cañón superior y, pese a ello, no termina destruida. La explicación de que los cañones venían desobturados de fábrica es desvirtuada por La explicación del perito de Carabineros que señaló que todas las pistolas a fogueo tienen el cañón o el cilindro obturado o semi obturado y que sólo las pistolas traumáticas que son aquellas cuyo proyectil es de goma o plástico, pueden ser desobturadas, sin embargo, de acuerdo a la clasificación que existe en Chile son armas de fuego, porque a través de la deflagración de la pólvora logran expulsar estas esferas de plástico o goma y de acuerdo a eso se infiere que no está permitido que un arma de fogueo ingrese al país con su cañón sin obturar, si el cañón no viene obturado, se trata de un arma de fuego convencional apta para el disparo, es decir, no es de fogueo.

El perito de la Defensa, ni siquiera realizó las pruebas de disparo y tampoco examinó la pericia realizada sobre el arma en el Labocar, por lo que no podía



conocer que las pruebas de disparo se realizaron con los mismos proyectiles balísticos que acompañaban el arma incriminada porque eran compatibles con ésta y tampoco al examinar el arma notó que haya estado destruida o dañada por haberse disparado con munición convencional.

Respecto a la aseveración de que no se había medido la eficacia del disparo, cabe consignar que lo que sí se probó, es que el arma de fogeo tuvo la capacidad de activar munición convencional y de expulsar el proyectil por su cañón, que es lo que determina su aptitud y carácter de arma de fuego y que constituye el peligro potencial de su uso, exigir que además se analicé o se cuantifique su capacidad de daño escapa a las exigencias contenidas en la Ley...”.

Tercero: Que, en lo concerniente a la infracción denunciada mediante la causal de nulidad propuesta a título principal, cabe indicar que el debido proceso es un derecho asegurado por la Constitución Política de la República y consiste en que toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y al efecto, el artículo 19, N°3, inciso sexto, confiere al legislador la misión de definir las garantías de un procedimiento racional y justo. Sobre los presupuestos básicos que tal garantía supone, se ha dicho que el debido proceso lo constituyen a lo menos un conjunto de garantías que la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por Chile que están en vigor y las leyes entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que puedan reclamar cuando no están conformes, que se respeten los procedimientos fijados en la ley y que las sentencias sean debidamente motivadas y fundadas.

Cuarto: Que, de otro lado, en cuanto a las facultades autónomas de actuación que la ley le entrega al personal policial, así como lo referido al respeto del debido proceso, esta Corte Suprema ha señalado reiteradamente que la negativa a admitir prueba ilícita, tiene como fundamento la concepción del proceso



como instrumento de resolución jurisdiccional de litigios dentro del ordenamiento jurídico, lo que conduce a que todo acto que infrinja de manera sustancial dicho sistema, debe ser excluido del mismo.

Quinto: Que, en relación con las normas de procedimiento aplicables al caso concreto, resulta necesario proceder a su análisis a efectos de poder determinar si ellas han sido transgredidas y, en su caso, examinar si dicho quebrantamiento ha significado la vulneración de los derechos fundamentales del acusado, como denunció su defensa.

Sexto: Que, como se ha consignado en ocasiones anteriores por esta Corte, el Código Procesal Penal regula a lo largo de su normativa, las funciones de la policía en relación con la investigación de hechos punibles y le entrega un cierto nivel de autonomía para desarrollar actuaciones que tiendan al éxito de la investigación. Tal regulación, en todo caso, contempla como regla general que su actuación se encuentra sujeta a la dirección y responsabilidad de los representantes del Ministerio Público o de los jueces (SCS N°s 7.178-2017, de 13 de abril de 2017; 9.167-2017, de 27 de abril de 2017; 20.286-2018, de 1 de octubre de 2018; 28.126-2018, de 13 de diciembre de 2018; y, 13.881-2019, de 25 de julio de 2019).

Es así como el artículo 83 del citado cuerpo normativo, establece expresamente el marco regulatorio de la actuación policial sin orden previa o instrucción particular de los fiscales permitiendo su gestión autónoma para prestar auxilio a la víctima (letra a); practicar la detención en casos de flagrancia conforme a la ley (letra b); resguardar el sitio del suceso con el objeto de facilitar la intervención de personal experto de la policía, impedir la alteración o eliminación de rastros o vestigios del hecho, etcétera, (letra c); identificar testigos y consignar las declaraciones que ellos presten voluntariamente, tratándose de los casos de las letras b) y c) citadas (letra d); recibir las denuncias del público (letra e) y efectuar las demás actuaciones que dispusieren otros cuerpos legales (letra f). Sólo en las condiciones que establece la letra c) recién citada, el legislador



autoriza a los funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile a efectuar diligencias autónomas de investigación.

A su vez, los artículos 85 y 86 del Código Procesal Penal, regulan el procedimiento de control de identidad, estableciendo la facultad de los funcionarios policiales para solicitar la identificación de cualquier persona sin orden previa de los fiscales, en los casos fundados en que estimen que exista algún indicio de que se hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a cometerlo; de que pudiese suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta; en el caso que la persona se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad; facultando para el registro de vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla, procediendo a su detención, sin necesidad de orden judicial, de quienes se sorprenda a propósito del registro, en alguna de las hipótesis del artículo 130 —que describe lo que debe entenderse por situación de flagrancia— así como de quienes, al momento del cotejo, registren orden de aprehensión pendiente.

Séptimo: Que las disposiciones recién reseñadas tratan, entonces, de conciliar una efectiva persecución y pesquisa de los delitos con los derechos y garantías de los ciudadanos, estableciéndose en forma general la actuación subordinada de los entes encargados de la ejecución material de las órdenes de indagación y aseguramiento de evidencias y sujetos de investigación al órgano establecido por ley de la referida tarea, los que, a su vez, actúan conforme a un estatuto no menos regulado —y sometido a control jurisdiccional— en lo referido a las medidas que afecten los derechos constitucionalmente protegidos de los ciudadanos.

Octavo: Que, a fin de dirimir lo planteado en el recurso, resulta necesario estarse a lo asentado por los jueces del fondo al ponderar las evidencias aportadas a la litis, sin que sea dable que, para tales efectos, esta Corte Suprema, con ocasión del estudio de la causal de nulidad propuesta, intente una nueva



valoración de esas probanzas y fije hechos distintos a los determinados por el tribunal del grado, porque ello quebranta de manera evidente las máximas de oralidad, inmediación y bilateralidad de la audiencia, que rigen la incorporación y valoración de la prueba en este sistema procesal penal. Aclarado lo anterior, se procederá al estudio de las protestas fundantes del recurso con arreglo a los hechos que en la decisión se tienen por demostrados.

Noveno: Que, de la lectura del considerando decimoquinto de la sentencia en revisión, referido previamente, el tribunal da por establecidos la existencia de una denuncia anónima, realizada al número telefónico del cuadrante de Carabineros, comunicación en la que se describía que dos sujetos, en un lugar determinado en la vía pública, precisando sus vestimentas con claridad, manipulaban armas en ese lugar, apersonándose los funcionarios policiales en el lugar, registrando a los acusados y encontrando las especies incriminadas.

De lo anterior, ya aparece que el actuar de funcionarios policiales se ajustó a Derecho, toda vez que atendida la comunicación efectuada al número telefónico del plan cuadrante, unido a lo percibido directamente por los funcionarios policiales, que corroboraba la referida descripción de los sujetos, habilitando así el actuar de los funcionarios policiales para realizar un control de identidad investigativo.

Décimo: Que, en síntesis, la defensa del acusado Morales Fuentes ha cuestionado el actuar de los funcionarios policiales, toda vez que estima que al practicarse un control de identidad fundado en una denuncia anónima, no reviste los caracteres de seriedad y verosimilitud exigidos, razón por la que funcionarios policiales actuaron de manera autónoma en un caso no previsto por la ley, lo que implica que todas las pruebas derivadas de tales diligencias son ilícitas, y, por ende, debieron ser valoradas negativamente por los juzgadores del fondo.

Undécimo: Que, al efecto y como se ha resuelto reiteradamente por esta Corte (entre otras, en SCS N^{os} 35.167-2017, de 23 de agosto de 2017; y, 41.165-2019, de 6 de febrero de 2020), es preciso señalar que lo informado mediante una



denuncia anónima puede constituir un antecedente que permite construir un indicio de la comisión de un delito, siempre que esté revestida de seriedad y verosimilitud, rasgos que se observan en la especie, dada la sindicación de la conducta desplegada por el acusado y un tercero en un lugar específico, así como las características específicas de sus vestimentas, lo cual fue ratificado por los propios sentidos de los funcionarios policiales.

Duodécimo: Que, en el mismo sentido, se ha declarado por este Tribunal (SCS N°8.335-2019, de 4 de junio de 2019) —más allá de expresar si esta Corte comparte o no la apreciación de los policías de que la situación de autos ameritaba controlar la identidad del acusado, desde que no se trata aquí de un examen de segunda instancia sobre la determinación de esos agentes—, que lo relevante y capital es que el fallo da por ciertas las circunstancias que objetivamente y de manera plausible, a un tercero observador imparcial, permitían construir un indicio de aquellos a que alude el artículo 85 del Código Procesal Penal, lo que lleva a descartar la arbitrariedad, abuso o sesgo en el actuar policial, por lo que los jueces del tribunal oral no incurrieron en vicio alguno al aceptar con carácter de lícita la prueba de cargo obtenida por la policía en las referidas circunstancias y que fuera aportada al juicio por el Ministerio Público.

Decimotercero: Que, en suma, la actividad policial ha sido desplegada dentro de los márgenes que la ley le confiere, de manera que no se aprecia inobservancia de las normas que el legislador consignó para un procedimiento como el de la especie, con lo que ciertamente no se afectaron las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, y, por consiguiente, el motivo de nulidad en estudio no puede prosperar.

Decimocuarto: Que, respecto a la primera causal de invalidación subsidiaria, esta Corte ya ha manifestado que toda sentencia criminal debe razonar y exponer los fundamentos en que se apoya, justificar la decisión adoptada, fijar los hechos y establecer el derecho aplicable. El cumplimiento de la obligación de motivación de la decisión significa elaborar una justificación



específica de la opción consistente en tener algunos hechos como probados, sobre la base de los elementos de prueba obtenidos en la litis, con las garantías inherentes al juicio oral. Tal deber apunta no sólo a permitir la comprensión de la decisión, sino además a garantizar la actuación racional en el terreno de la determinación de las premisas fácticas del fallo (entre otras, SCS N°s 14.491-2021, de 13 de abril de 2021; y, 92.094-2020, de 14 de septiembre de 2020).

La satisfacción de esta carga posibilita la fiscalización de la actividad jurisdiccional por los tribunales superiores mediante el ejercicio de los recursos procesales. Si el tribunal explica las razones de su resolución es posible controlar si efectivamente la actividad judicial se ha desarrollado dentro de los parámetros de la lógica-racional y la legalidad o si, por el contrario, es el resultado de la arbitrariedad. Por ello, en nuestro ordenamiento jurídico las decisiones judiciales no deben resultar de meros actos de voluntad o ser fruto de simples impresiones de los jueces, sino que deben ser el corolario de la estimación racional de las probanzas, exteriorizada como una explicación igualmente racional sobre las razones de la decisión de una determinada manera —y no de otra—, explicación que deberá ser comprensible por cualquier tercero, mediante el uso de la razón.

Tal comprensión se ajusta a una noción de racionalidad comunicativa con respecto a la evidencia, por la cual se entiende la valoración de la prueba como el proceso de determinación de la verdad o falsedad de las proposiciones sobre hechos conforme a las relaciones inferenciales que existen entre ellas y las pruebas disponibles.

Decimoquinto: Que, al mismo tiempo, la fijación de los hechos y circunstancias que se tuvieran por probadas, favorables o desfavorables al acusado, debe ir precedida de la debida valoración que impone el artículo 297 del código adjetivo. Atendiendo a esta norma, el tribunal debe hacerse cargo de toda la prueba producida, incluso la desestimada, con señalamiento de los medios de prueba, único o plural, por los cuales se dieran por probados los hechos y circunstancias atinentes a la litis.



Decimosexto: Que, tal exigencia de fundamentación ha sido debidamente satisfecha por la sentencia que se revisa. En efecto, el fallo extrae conclusiones del análisis de la prueba, como resultado de un proceso valorativo de cada uno de los elementos de convicción rendidos, tanto respecto de los hechos objetivos integrantes del tipo penal atribuido, como de la conducta desplegada por el acusado.

En las condiciones expresadas no puede catalogarse como carente de lógica y comprensión el fallo impugnado, como demanda el artículo 342 del Código Procesal Penal, desde que la sentencia entrega los basamentos que conducen a la decisión alcanzada respecto de los delitos pesquisados, fundada en el análisis singular y conjunto de las probanzas producidas, lo cual surge de la lectura de los considerandos del fallo. Tales consideraciones conducen a una conclusión unívoca, como expresa la sentencia, cuya inteligencia se justifica en virtud de los argumentos explicitados en ella y que no han sido desvirtuados por el recurso, por lo que sólo resta concluir que las impugnaciones formuladas por la defensa dan cuenta de una mera discrepancia con las conclusiones alcanzadas por el peritaje al cual el tribunal le atribuyó credibilidad por sobre las probanzas en que se asila la defensa, juicio que el tribunal sustentó suficientemente como se advierte del motivo decimoquinto de la sentencia recurrida y transcrito *ut supra*, por lo que las imputaciones relativas a una presunta falencia en el razonamiento no será admitida.

Decimoséptimo: Que, en relación con la segunda causal subsidiaria, el recurso argumenta un error de Derecho basado en que no se habría logrado acreditar la idoneidad del arma para ser disparada y, por ende, que no se habría puesto en riesgo el bien jurídico protegido.

Decimooctavo: Que, respecto de la exigencia de puesta en peligro del bien jurídico protegido en cada tipo penal, en sentido sistemático, como equivalente a la finalidad de protección constitucionalmente reconocida de la norma en cuestión, es efectivo que tal requerimiento impone adoptar en la elección de la propuesta de



interpretación de un tipo penal, aquella de la que resulta la protección del bien jurídico específico que la ley quiere amparar. Tal exigencia se sintetiza en el principio de lesividad, entendido como la consideración del daño social que importa la lesión al bien jurídico protegido por cada hecho punible en particular, permitiendo, además, los márgenes precisos de aplicación de cada tipo penal.

Luego, determinado el bien jurídico que cada ley penal protege en particular y su forma de afectación, es posible afirmar que de no comprobarse dicha afectación en un proceso concreto, no puede afirmarse la existencia del delito, esto es, debe concluirse por la atipicidad de la conducta de que se trate por falta de antijuridicidad material.

Este Tribunal se ha pronunciado en más de una oportunidad sobre la vigencia de tal principio, incluso en los llamados delitos de peligro, esto es, aquellos en que la ley se contenta con describir un hecho que estima riesgoso, atendida la probabilidad de que de él se deriven daños para intereses sociales o individuales protegidos, pero sin considerar el daño o lesión concreta a esos bienes jurídicos como elementos del tipo penal respectivo. Así, en torno al delito de tráfico ilícito de drogas, donde —a pesar de los fallos contradictorios en cuanto a la exigencia o no de una forma precisa de probar la naturaleza y cantidad de las sustancias que se tratan (si se requiere o no el protocolo de análisis del Servicio de Salud a que hace referencia el artículo 43 ley N° 20.000)—, el principio de que su carácter de droga nociva debe ser probado no se altera.

En el caso de la posesión de armas y municiones, el mismo principio guía la jurisprudencia que excluye del ámbito de lo punible, la posesión de tales elementos que no están en condiciones de disparar o ser disparados, por no poner de ninguna manera en peligro el bien jurídico protegido.

Tratándose de delitos de peligro contra la salud pública, la Corte Suprema ha establecido que una conducta que sólo infringe disposiciones administrativas, pero no es idónea para generar el peligro para el bien jurídico que la ley quiere evitar, no es típica, como sostenidamente se afirmó respecto de personas que



infringían las restricciones sanitarias en pandemia, pero sin crear un peligro de contagio real (SCS N°s 125.436-2020, de 25 de marzo de 2021; y, 149.239.2020, de 20 de abril de 2021). De allí que las diferentes clasificaciones de los delitos de peligro existentes carezcan de mayor importancia en nuestro sistema, pues, aunque el peligro se califique de “abstracto”, “hipotético”, “acumulación”, “preparación”, “intención”, “aptitud” o “idoneidad”, siempre se debe exigir la prueba de su realización según lo previsto en el tipo penal correspondiente.

Decimonoveno: Que, por lo recién señalado, la alegación de que la sentencia definitiva de esta causa habría infringido el principio de lesividad, por no haberse puesto en peligro el bien jurídico protegido en el delito de porte de armas de fuego, debe desecharse, pues, conforme se razonó en el considerando precedente, los jueces de la instancia establecieron que el arma de fogeo portada por el acusado, se había modificado para hacerla apta para el disparo de municiones, por lo que el peligro común que con la tipificación de esta conducta se pretende evitar fue comprobado en el caso concreto, careciendo la argumentación de la defensa de sustento fáctico que la respalde.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 373 letras a) y b), 374 letra e), 376 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por la defensa de Rodrigo Antonio Morales Fuentes, en contra de la sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, pronunciada por el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, y en contra el juicio oral que le antecedió en el proceso RUC 2.200.652.774-8, RIT 341-2023, los que, por consiguiente, **no son nulos**.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Gandulfo.

N°248.091-2023.



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R. y Leopoldo Llanos S., Ministra Sra. María Cristina Gajardo H. y los Abogados Integrantes Sres. Álvaro Vidal O. y Eduardo Gandulfo R. No firman el Ministro Sr. Valderrama, la Ministra Sra. Gajardo y el Abogado Integrante Sr. Vidal, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por estar con licencia médica el primero, haciendo uso de su feriado legal la segunda y ausente el tercero.



En Santiago, a tres de febrero de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

